



UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Biblioteca Universitaria



UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Vicerrectorado de Cultura y Deporte

MUERTE EN LA UNIVERSIDAD

Fernando Fernández Rodríguez



DIPLOMA 2014

MUERTE EN LA UNIVERSIDAD

Fernando Fernández Rodríguez

MUERTE EN LA UNIVERSIDAD

Fernando Fernández Rodríguez

El inspector Antonio Jiménez aparcó su vehículo en la explanada y, siguiendo las instrucciones que llevaba apuntadas en su libreta de notas, bajó por la acera que pasaba frente a la Biblioteca Universitaria. Entonces se detuvo un instante, en una pequeña zona ajardinada le fascinó una estatua de bronce que simulaba a un hombre en actitud especulativa. En efecto, aquel lugar invitaba al pensamiento por su sobriedad. Después, mientras continuaba su camino hacia la Facultad de Economía, recordó haber leído, mientras se documentaba sobre el caso que debía investigar, que aquel campus universitario había sido construido en el antiguo palmeral de Salvago, un rincón único y seductor en el que parecía imposible que alguien hubiese sucumbido al salvaje instinto homicida de cometer un asesinato.

El decano le esperaba en la puerta del edificio principal con aire de preocupación; cuando llegó el inspector, le estrechó cordialmente la mano y le explicó que la tarde anterior uno de los profesores había aparecido estrangulado en su despacho. Aunque en la Universidad siempre había muchas envidias, la víctima era un catedrático que no tenía problemas con nadie, un científico esforzado que había hecho una tesis doctoral sobre la Teoría del Caos y trabajaba discretamente en sus proyectos. Siempre se había llevado bien con sus alumnos; tampoco se le conocían enemigos entre sus colegas. A pesar de todo, no podía descartarse una malquerencia. La adaptación del plan Bolonia para los títulos de grado había provocado numerosas rencillas entre el profesorado; “ya se sabe”, explicó con sorna el decano, “la mejor radiografía del poder en una facultad son sus planes de estudios”. Después puso en antecedentes al inspector de un mensaje que había aparecido escrito en una pequeña pizarra en el despacho del finado y que quizás pudiese constituir una pista clave. Era un extraño jeroglífico donde se podía leer “*B2012O15651EA*”, y la limpiadora del edificio juraba que no estaba escrito la mañana anterior.

El inspector dedicó el resto de la mañana a deambular por la Facultad y preguntar a los profesores por el sentido que podía tener para ellos aquel enigmático conjunto de signos que había aparecido en el despacho de la víctima, pero ninguno consiguió encontrarle una interpretación. Al mediodía, Antonio Jiménez abandonó la Facultad de Economía con mayor confusión de la que había

traído; regresó directamente a la Jefatura para tratar de encontrar en sus archivos algún otro crimen no resuelto que tuviese un patrón parecido.

A las ocho de la tarde, cuando estaba a punto de irse a casa, sonó repentinamente el teléfono. Un guardia de seguridad de la Universidad acababa de encontrar a otro catedrático asesinado en su despacho de la Facultad de Derecho, a doscientos metros del lugar que él había visitado esa misma mañana. Las circunstancias eran las mismas. El crimen se cometía al atardecer, que era un momento de menor actividad de profesores y alumnos en el edificio; en la pantalla del ordenador de la víctima volvían a leerse los signos del fatídico acertijo: *B2012O15651EA*.

Al día siguiente el inspector se dirigió bien temprano al despacho del rector quien lo recibió con sobrio ceremonial, poniéndose al servicio de la investigación. Tomaron café y, mientras departían sobre el espinoso tema, el policía sugirió que como medida preventiva podrían cerrarse todas las instalaciones universitarias a partir de las siete de la tarde, que era el momento en que parecía atacar el asesino. El rector aceptó la sugerencia; pero, mientras se preparaba para firmar la orden de cierre parcial y se disponía a emitir un aviso dirigido a los medios de comunicación, uno de los vicerrectores entró sofocado en el despacho. El decano de Educación Física acababa de telefonar anunciando la muerte de otro catedrático en idénticas circunstancias a los dos anteriores. La única diferencia era que en esta ocasión el asesino había actuado al mediodía, por lo que ya carecía de sentido suspender las actividades nocturnas y obligar a que el campus quedase desalojado a últimas horas de la tarde.

La noticia saltó a la primera página de todos los periódicos de tirada nacional. “¿Vendetta académica o zancadilla universitaria?”, titulaba uno. “¿Estaremos ante una enfermedad contagiosa procedente de Bolonia?”, preguntaba otro. El revuelo que se había organizado era tan grande que el propio ministro telefoneó esa misma mañana. “Un servidor público no puede nunca arredrarse ante las dificultades y debe ser como un toro bravo que se crece con el castigo”- le dijo al rector, al tiempo que manifestaba sus condolencias por la tragedia ocurrida.

El equipo rectoral reaccionó con celeridad ante la gravedad de los hechos y puso, de inmediato, todos los medios de que disponía al servicio del inspector Jiménez. Lo primero que acordaron fue desplegar un amplio dispositivo policial dentro del campus destinado a controlar cualquier movimiento sospechoso, aunque todos estaban convencidos de que el asesino debía ser un miembro de la comunidad universitaria, lo que haría muy difícil su identificación. También se dio orden a los guardias

de seguridad que tenía contratados la Universidad para que redoblasen la vigilancia en todos los edificios a cualquier hora del día. Por último, intentaron hallar una relación entre las muertes, pero no encontraron ningún vínculo capaz de conectar a tres profesores de las Facultades de Económicas, Derecho y Educación Física, que quizás ni siquiera se conociesen entre sí, que trabajaban en proyectos completamente diferentes, y cuya única característica común de sus carreras profesionales consistía en que los tres eran catedráticos de universidad. El inspector insistía una y otra vez en ese punto: “sin encontrar un móvil es imposible resolver el caso”. Mientras, los miembros del equipo rectoral se miraban atónitos, temiendo que continuase la racha de horrendos crímenes.

Por eso, transcurrida la primera hora de reunión, el policía pidió al rector que las deliberaciones se centrasen en dar algún sentido al extraño código *B2012O15651EA* que aparecía como denominador común de todos los homicidios. Ninguno de los presentes conseguía encontrar significado alguno al jeroglífico que servía de firma al asesino de los tres catedráticos, pero alguien sugirió que era posible movilizar a toda la comunidad universitaria con semejante objetivo; al fin y al cabo, era allí donde se concentraba la más poderosa avanzadilla de la inteligencia con que contaba la ciudad. Fue así como el equipo rectoral promovió un concurso de ideas para descifrar el misterioso jeroglífico. Todos los departamentos se volcaron en aquella labor y, aunque nadie dio de inmediato con la solución, sí llovieron las sugerencias de por dónde se podía investigar. El departamento de Psicología dictaminó que el asesino era un individuo astuto y arrogante dispuesto a desafiar intelectualmente a la Universidad y a jugar con la policía por arriesgado que resultase; la hipótesis no resultaba novedosa para Antonio Jiménez que en su largo ejercicio profesional había tenido la ocasión de estudiar la personalidad de numerosos sicópatas. A juicio del departamento de Informática, el código contenía el número clave de alguna dirección de internet; entrar en ella supondría desvelar inmediatamente la identidad del asesino; era algo parecido a encontrar a la dueña del zapato que había perdido Cenicienta, pero en este caso las damas que vivían en el reino eran un número casi inagotable de páginas web en las que resultaba imposible probar la clave una por una. El departamento de Física propuso entonces que fuese empleado el superordenador con que contaba la Universidad para descifrar el misterio; quizás aquellas cifras, o alguna de sus combinaciones, pudiesen tener una interpretación como un sujeto de búsqueda a través de Google, y eso podría aportar alguna pista definitiva sobre el caso. El departamento de Matemáticas optó, en cambio, por darle al problema una solución criptográfica. Era evidente que tras el código se escondía algún

mensaje en clave que quizás coincidiese con el nombre del asesino o alguna otra característica que permitiese identificarlo. La criptografía era una antigua ciencia que permitía ocultar algún mensaje cifrado y los avances producidos durante las últimas décadas en la teoría de cuerpos ciclotómicos ayudaban a desentrañar muchos de los mensajes.

Todos y cada uno de los departamentos implicados se volcaron en descifrar el fatídico acertijo con tenacidad, haciendo que sus profesores postergasen otros proyectos para concentrarse en averiguar la identidad del asesino. Había muchas esperanzas de culminar con éxito la tarea emprendida y un portavoz de la policía llegó a declarar en la prensa que, con la ayuda de los numerosos procedimientos científicos puestos en juego, el caso estaba a punto de ser resuelto. Pero los días pasaban sin que nadie fuese capaz de llegar a una conclusión definitiva, y las facultades de Humanidades y Veterinaria también se tiñeron de rojo con la aparición de dos nuevos cadáveres. El patrón de las muertes volvía a repetirse: dos catedráticos estrangulados y en el tablón de anuncios situado en la puerta de sus despachos, el mensaje *B2012O15651EA*.

Todo se complicaba porque las dos facultades estaban separadas por muchos kilómetros de distancia, lo que quería decir que el asesino era capaz de moverse con plena libertad dentro de los distintos campus, a pesar de los continuos controles policiales que se habían establecido; la única medida que podía tomar ahora el rector era la de cerrar indefinidamente todas las instalaciones universitarias dejando sin clases a más de veinte mil alumnos y sin posibilidad de que mil quinientos profesores continuasen con su labor investigadora.

El inspector Antonio Jiménez, con aire desolado, dio un último paseo por el campus, que a la mañana siguiente iba a ser clausurado inexorablemente para evitar males mayores. Cuando pasaba frente a la estatua del pensador se detuvo a contemplarla; no pudo resistirse a la belleza de aquel instante y se sentó en la yerba a contemplar el cielo violáceo con que el sol teñía el ocaso del palmeral de Salvago.

Después decidió entrar un momento en la biblioteca universitaria. Curioseó en los tabloneros que estaban expuestos a la entrada anunciando a estudiantes y profesores información sobre eventos y recientes disposiciones aprobadas por el Consejo de Gobierno y por el Ministerio. Por casualidad se detuvo en uno de los anuncios; en éste se decía:

- Orden ECD/1565/2013, de 2 de agosto, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía.

Una luz se encendió de pronto en su cabeza y se dirigió rápidamente a una funcionaria que estaba sentada en la ventanilla de información. “¿Qué le sugiere a usted la lista de símbolos *B2012O15651EA?*”- preguntó.

- Desde mi punto de vista se trata de una orden ministerial publicada en el BOE que algún bromista ha trastocado un poco, quizás para hacerse el gracioso - respondió la funcionaria con aire inequívoco -. Creo que si lo escribimos de la forma *BOE-A-2012-15651* no hay la menor duda de que se refiere a la orden número 15651, de 2012.

El inspector pidió entonces a uno de los empleados de la biblioteca que le imprimiese el contenido de dicha orden. Se trataba de un decreto del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de remodelación de las plantillas universitarias que, aunque leyó repetidamente, no fue capaz de comprender en su totalidad. Igual que ocurría con el resto de los funcionarios de los demás ministerios, se congelaban sus plantillas hasta nueva orden. Pero, ¿qué tenía todo ello que ver con la muerte de cinco catedráticos de aquella universidad?; ¿y cuál había sido el móvil de los cinco asesinatos? Quizás la ocurrencia de la administrativa de la biblioteca solo fuese una pista falsa.

Poco después, con esas dudas revoloteando en su cabeza, decidió llamar al rector para ponerlo en antecedentes de la nueva línea de investigación. Éste, lejos de tomarse en broma la información, convocó de inmediato a los miembros de su equipo. Cuando Antonio Jiménez llegó a la reunión, todos los presentes se mostraban exultantes; parecía que ya habían resuelto el enigma. El móvil de todos los asesinatos parecía ser el decreto en sí mismo; en él se establecía que la tasa de reposición de funcionarios de la Universidad era solo del diez por ciento; esto quería decir que de cada diez funcionarios que cesasen su actividad, por muerte o por jubilación, solo uno de ellos podría ser repuesto, lo que conducía directamente al móvil de los asesinatos. Alguien se había vuelto loco y estaba matando catedráticos para propiciar su reposición; aunque en la Universidad había muchas envidias, las sospechas recaían fundamentalmente en algún profesor recientemente acreditado por la Agencia Nacional que ahora veía frustrada su promoción después de tantos años de duros esfuerzos.

Cuando Antonio Jiménez preguntó cuántos profesores de la Universidad habían obtenido la acreditación para catedrático y tenían bloqueada su promoción debido a la reducida tasa de

reposición, un vicerrector le respondió que había exactamente diez profesores en esas circunstancias. Seis de ellos se encontraban en este momento en el extranjero con una licencia de investigación. Otro de los diez sospechosos podría optar a la plaza de catedrático dentro de los próximos meses, luego debería ser descartado. Los tres restantes eran dos mujeres y un hombre; las dos damas eran de mediana edad, escasamente corpulentas e incapaces de practicar un estrangulamiento, sobre todo teniendo en cuenta que una de las víctimas era un consumado deportista. Todas las pistas conducían, por lo tanto, a un único profesor, de aspecto fornido, capaz de coger por el cuello a una persona con cada mano.

Antonio Jiménez anotó inmediatamente en su cuaderno el nombre y número de despacho del principal sospechoso y telefoneó seguidamente a la comisaría pidiendo que fuesen enviados refuerzos. Acto seguido se trasladó junto con el rector hacia el despacho del sospechoso. Cuando llegaron, el conserje dijo que el profesor que buscaban llevaba ya algunas horas en el despacho y no había salido en toda la mañana ni para ir a la cafetería.

-Abra la puerta a la autoridad; es inútil que oponga resistencia; queda usted detenido – gritó el inspector mientras empuñaba su revólver reglamentario. Pero nadie respondió desde el interior del despacho; al poco rato un conserje abrió la puerta con la llave maestra y todos se precipitaron hacia su interior. Tirado en el suelo encontraron al hombre al que buscaban; tenía un puñal clavado en la espalda y según reveló poco después el forense llevaba muerto varias horas. Después de una breve reflexión el inspector cayó en la cuenta de que aquel nuevo crimen daba un vuelco completo a la investigación. La pista del Boletín Oficial del Estado parecía totalmente falsa y podía tener algún extraño significado que quizás nunca se llegase a averiguar; los acreditados a cátedra quedaban, por lo tanto, libres de toda sospecha. Era muy probable que no hubiese un solo asesino sino varios, que habían actuado de forma descoordinada y usaban el acertijo del primero de los crímenes para crear más confusión y ocultar su identidad. Pero eso complicaba mucho las cosas, sin un móvil claro cualquier miembro de la comunidad universitaria podía ser potencialmente sospechoso.

Tamaño oleada de crímenes alarmó incluso al propio ministro quien, preocupado por las consecuencias que todo aquello podía tener sobre la plantilla de funcionarios, decidió ponerse en contacto con el rector. “No podemos hacernos trampas al solitario”, le dijo, “la reposición de las bajas de los profesores que han muerto asesinados de ninguna forma puede considerarse amparada por el Decreto A-2012-15651. El espíritu de la ley solo contempla reponer el 10% de la plantilla que cese

por jubilación o fallezca por causas naturales ;violentar ese espíritu sería como dar una beca a un alumno con un cinco raspado o financiar un programa Erasmus donde los beneficiarios salen al extranjero a ligar. Por tanto, no procede la convocatoria de ningún nuevo concurso a los cuerpos nacionales de funcionarios docentes universitarios; en una situación como esta solo la firmeza ayudará a detener los crímenes”.

Pero los consejos del ministro no detuvieron la fiebre del homicidio que continuó extendiendo su órbita siniestra por los confines del campus, y el inspector muy pronto comprendería que el móvil de todos los asesinatos no era otro que la envidia. Porque aquel clima sangriento sumió a la Universidad en un continuo sobresalto en el que el rencor y las rivalidades, tanto tiempo contenidas, afloraron con rapidez y cada estamento optó por resolver sus diferencias por la vía del ajuste de cuentas. Dos profesores titulares rodaban escaleras abajo en misteriosas circunstancias, haciendo pensar que la inocente travesura de la “zancadilla universitaria” se había convertido en un talento monstruoso en manos de catedráticos insidiosos. Otro tanto ocurría con los contratados doctores, tres de los cuales aparecieron muertos a navajazos tras obtener su acreditación en la Agencia Nacional. Un director de departamento también era víctima de los celos profesionales; alguien había colocado un escorpión en uno de los cajones de la mesa de su despacho y pereció envenenado entre dolorosos estertores. Si dos compañeros del mismo departamento deseaban impartir una misma asignatura, ¿qué mejor solución para el que estuviese peor posicionado que abrir la crisma de su oponente? Si dos investigadores deseaban realizar un mismo proyecto, ¿por qué no hacer que uno de ellos tuviese un pequeño accidente en el garaje, o simplemente cayera al vacío por el hueco de un ascensor? Todos estos sucesos inquietaron profundamente a las autoridades académicas que, incapaces de frenar la escalada de violencia, decidieron convocar un claustro que se reunió en sesión extraordinaria para analizar la situación. El ministro también acudió como invitado de honor.

Al contrario de lo que solía ocurrir, asistió la inmensa mayoría del estamento docente que alarmado por los acontecimientos alcanzó quórum en primera convocatoria. También estaban presentes casi todos los profesores no claustrales que, deseosos de escuchar las deliberaciones, abarrotaban cientos de butacas laterales que fueron habilitadas para ellos. Tanto el alumnado como el personal de Administración y Servicios habían decidido, en cambio, no acudir por miedo a que se produjese alguna refriega. Mientras el defensor de la comunidad universitaria daba un detallado informe destacando que, de forma incomprensible, la envidia se había apoderado del campus, dos

conserjes llegaban alarmados gritando que las puertas del recinto habían sido cerradas por fuera. Poco después, la mesa del claustro leyó un ultimátum escrito por la misma persona que había bloqueado las salidas desde el exterior; en él realizaba diversas peticiones relativas a su futuro académico, denunciaba los manejos en contra suya de varios colegas y advertía que numerosas cargas explosivas, colocadas en el edificio, estaban a punto de detonar. El ministro quiso tomar inmediatamente las riendas de la situación y, en un alarde de serenidad y firmeza, aconsejó no hacer la menor concesión a aquel chantajista. Así ocurrió y el claustro rechazó por unanimidad cualquiera de sus peticiones. Pasados unos minutos se producía una explosión colosal, el Paraninfo resultaba completamente demolido y bajo un enorme montón de escombros quedaba sepultada toda la plantilla de profesores. Solo se salvó el ministro, que resultó milagrosamente ileso.

A raíz de aquel espantoso suceso la Universidad fue clausurada. La prensa local derramó mucha tinta reclamando a Madrid la concesión de un crédito extraordinario que posibilitase la contratación de nuevo profesorado foráneo y la pronta reapertura del centro académico. Pero no ocurrió así; en medio del clima de recortes presupuestarios que vivía el país, el ministro había convencido al presidente de la comunidad autónoma de que resultaba más barato becar a los alumnos y mandarlos a estudiar fuera que recomponer la plantilla de profesores. “No hay mal que por bien no venga y en estas circunstancias no nos queda más remedio que buscar el lado bueno de las cosas. Desde el punto de vista económico lo sucedido ha sido un buen negocio para las arcas del Estado”, dijo en los medios de comunicación con aire magistral. De este modo, los edificios que albergaban las facultades pasaron a convertirse en dependencias municipales, el personal no docente fue transferido a otros destinos, y el hermoso palmeral de Salvago se convirtió en un lugar de esparcimiento público donde los ciudadanos sacaban a los perros para que hicieran sus necesidades.

Pocos meses después, el inspector Antonio Jiménez subió una tarde a pasear al campus de Tafira. Mientras avanzaba pensativo recordaba los insólitos acontecimientos vividos allí meses atrás; se paró un momento ante la estatua del pensador mientras decía para sus adentros: “la envidia es el pecado capital universitario”. Fue en ese preciso instante cuando su teléfono móvil recibió una llamada urgente desde la jefatura. Debería desplazarse de inmediato a Tenerife; un catedrático acababa de ser asesinado en la Universidad de la Laguna. Poco después, cuando regresaba a su despacho en el coche patrulla, el teléfono volvió a sonar. En esta ocasión era el ministro quien

llamaba. Su voz tenía un tono dramático que mezclaba euforia y terror. La sombra de la muerte también comenzaba a extenderse por otros cinco campus del país.
